Imprimir

Los economistas neoliberales influyentes exigen una reducción drástica del gasto público tachándolo de ineficaz. Junto con ciertos políticos y «expertos», reclaman un ahorro rápido porque, según ellos, solo así bajarán las tasas de desempleo y las generaciones futuras no cargarán con una deuda excesiva.
No obstante, omiten que el gasto público financia servicios públicos básicos: educación, hospitales, policía, justicia, pensiones, prestaciones por desempleo… Porque, para los detractores del gasto público, lo fundamental es potenciar una masa monetaria que acreciente los beneficios privados, no el uso social que de ella se haga.

Sin embargo, debe quedarnos claro que la reducción del gasto público se ensaña en las clases medias y trabajadoras, que no cuentan con medios para costearse servicios necesarios si no son públicos.

¿De dónde procede el «gasto público» y a qué se aplica?

De los impuestos que pagan los ciudadanos. La masa monetaria creada se destina al sector público para beneficio de la ciudadanía.

Se aplica al funcionamiento de la administración pública, la inversión pública, los intereses de la deuda pública y las transferencias dedicadas a prestaciones sociales, subvenciones, etc.

La masa monetaria del gasto público no se toma del producto interior bruto (PIB), que es lo que nos quieren hacer creer los neoliberales, sino de una magnitud que se compara con el PIB[1]. Por eso es fundamental «saber leer» la factura del gasto público. Evitaremos así las interpretaciones capciosas de los neoliberales.

Ejemplos beneficiosos y perjudiciales de gasto público

Francia es un país con uno de los gastos públicos más altos del mundo. En 2015, fue de un billón 243 mil millones de euros. Su relación con el PIB del país era del 57%. Que quede claro

que dicha cifra no significa que haya tomado esa parte del PIB para el gasto público ni que el sector privado se haya quedado con el 43% restante. Se trata simplemente de un valor comparativo relacionado con el PIB. No obstante, los neoliberales intentan vincular esa cifra al PIB sin añadir ninguna explicación, porque su objetivo es que creamos que el gasto público capta el 57% de la riqueza producida, lo cual es totalmente falso. Asimismo, da a entender que el sector público es mayoritario frente al privado, lo que también es falso.

El economista francés Christophe Ramaux, profesor investigador de la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, demostró que, si se aplicase el mismo método de cálculo al gasto privado de los hogares y las empresas, el gasto ascendería a más del 200% del PIB. Entrarían los salarios pagados por el sector privado, el consumo intermedio, los impuestos sobre los productos y la producción, los ingresos por los impuestos a la propiedad, los impuestos sobre los ingresos y sobre el patrimonio, los intereses, las prestaciones sociales privadas, las transferencias y la inversión. Superaría los cuatro billones 2oo mil millones de euros. Por tanto, el sector privado sigue siendo mayoritario en Francia.

Alemania tiene un gasto público del 44% comparado con el PIB porque la mayoría de las pensiones se pagan mediante la capitalización[2] y son opcionales, mientras que en Francia son obligatorias y distributivas[3]. Por tanto, los jubilados franceses están mejor cubiertos y son menos pobres que los alemanes. Además, su tasa de pobreza era una de las más bajas del mundo.

En resumen, hay países que han optado por servicios públicos financiados por la colectividad con gastos públicos mayores y otros que han dejado en manos del sector privado parte de sus bienes estatales.

El resultado —nunca publicitado masivamente— es que la calidad de la protección social de los individuos es mayor cuando los servicios públicos son financiados por la colectividad. Por cierto, según el modelo por el que opte un país, deduciremos qué lugar ocupan sus ciudadanos en el imaginario nacional…

Volviendo a Francia, optó por una financiación basada en el cobro de impuestos para que el consumo fuese gratuito. Con ello, garantizaba el acceso a toda la población y aseguraba una igualdad irreducible. El financiamiento de los servicios público mediante impuestos permite distribuir mejor la carga entre el conjunto de la población. Cuando se delega en el sector privado, desciende la carga tributaria, pero el consumo de los servicios se le paga al sector privado. En consecuencia, queda excluido el sector de la población que no cuenta con medios para pagarlos. Si la privatización de los servicios públicos fuese total, el sector privado fijaría los precios, no permitiría su reembolso y aumentarían mucho más las desigualdades. Es lo que ocurre con las compañías de la luz. El mejor ejemplo son los Estados Unidos, donde el sistema de salud es privado, es carísimo y muy poco igualitario. Cada año, dos millones de estadounidenses entran en bancarrota debido a las facturas médicas.

Este tipo de comparaciones deberían hacerse de forma habitual, pero los neoliberales lo impiden acusando de ideólogos y radicales de izquierdas a quienes las realizan. Con todo, es fundamental recordar que el gasto público implica contrapartidas que benefician a toda la población; mientras que la privatización deja fuera del sistema a los más necesitados, que son la mayoría.

Curiosamente, los neoliberales «olvidan» que los regalos a los más ricos en paquetes como los créditos fiscales, son subsidios que aumentan el gasto público. Es decir, cuando se trata de servicios públicos, hay que reducir el gasto público, pero cuando se trata de subsidios que el Estado ofrece a las empresas, no.

Más gasto público no implica más deuda pública

Los neoliberales exigen la reducción del gasto público porque lo vinculan a la deuda pública para conseguir dicha reducción. Sin embargo, no existe una relación directa entre la cantidad de gasto público y la cantidad de deuda pública. Es más: se ha comprobado que los recortes del gasto público, en lugar de reducir la deuda, la aumentan, porque conllevan un descenso del PIB.

Volvamos a los ejemplos. Dinamarca tenía hace unos años una deuda baja (40% del PIB) y un gasto público alto (55% del PIB). Japón, una deuda pública elevadísima (250% del PIB) y un gasto público bajísimo (41% del PIB). Portugal, una deuda pública del 130% del PIB y un gasto público del 46% del PIB. En Grecia, la reducción de más del 20% del gasto público entre 2009 y 2015 implicó la caída del PIB en un 25%, por lo que la deuda pasó de 126.7 a 177.4 por ciento.

¿Por qué? El denominador (PIB) disminuye más marcadamente que el numerador (deuda).

La cantidad de deuda pública no debería ser nunca una excusa para limitar el gasto público. Pero es una táctica utilizada por los neoliberales para asustar a la gente y convencerla de que acepte reducciones presupuestarias que van en detrimento suyo. Se trata de otro engaño más del neoliberalismo. Si analizamos los casos de Francia, Alemania o Reino Unido en 1945, comprobaremos que tenían deudas superiores al 200% del PIB y quedaron totalmente pagadas a principios de los 1950.

No fue por una reducción del gasto público —de hecho, se vivió durante treinta años un gran bienestar—, sino porque se recurrió a la inflación, la introducción de un impuesto excepcional al capital privado —sobre todo los grandes patrimonios— y una negociación de la deuda más objetiva.

Desgraciadamente, los gobiernos actuales no están por imitar la acertada actuación de sus colegas del siglo pasado y han optado por hacer todo lo contrario: no gravar en absoluto los grandes patrimonios y negociar con los bancos privados en condiciones muy desfavorables.

En 1945, la opción se inclinó a favor del pueblo y en contra de los muy ricos, los bancos y los accionistas. Desde el último tercio del siglo pasado, por el contrario, han optado por recortar los servicios públicos por considerarla una opción utópica, a pesar de haberse aplicado con gran éxito. Sin embargo, esa política no ha reducido en absoluto la deuda pública, pero ha condenado a los países europeos del sur a vivir en situaciones mucho más difíciles.

Impacto social de la reducción del gasto público

En el ámbito neoliberal, la reducción del gasto público es ampliamente aceptada porque la gente no es consciente de la verdad y el político que la plantea es considerado persona seria y responsable.

En Francia, cuando el presidente Emmanuel Macron presentó un programa de ahorro del gasto público de 60.000 millones de euros fue recibido como un héroe por los medios de comunicación. Desgraciadamente, nadie le preguntó cómo ahorraría 25.000 millones de euros en el ámbito social y 15.000 millones en seguros de salud. Tampoco le preguntaron cómo extendería los beneficios por desempleo a los empresarios autónomos y a los dimisionarios o cómo ahorraría 10.000 millones de euros en el seguro de desempleo. Solo habló de «reformas estructurales» que nadie le preguntó cuáles eran. Tampoco le preguntaron cómo pensaba reestructurar las colectividades territoriales cuando dijo que reduciría el gasto en 10.000 millones de euros más.

Si los franceses y sus representantes no neoliberales hubiesen exigido a Macron que explicase de forma clara y detallada a qué se refería cuando hablaba de «reducciones», el pueblo no lo habría aceptado con tanta facilidad. El resultado ha afectado gravemente la vida cotidiana de los franceses: prestaciones por desempleo menos altas y en periodos más breves, menos medicamentos con reembolso, menos guarderías, menos funcionarios para atender físicamente al público, menos espacios de ocio para las colectividades territoriales. La única explicación que dio Macron fue la importancia de generar grandes masas monetarias abstractas, sin explicitar nada más, y rodeando dicha promesa de seriedad.

Objetivo de los defensores de la reducción del gasto público

Atacar el Estado de bienestar para eliminarlo y aumentar mucho más sus beneficios.

El seguro médico privado y las pensiones mediante capitalización enriquecen todavía más a unos cuantos grupos financieros privados, que aumentan sus ingresos en mercados futuros.

El gran perdedor es el ciudadano, que paga menos impuestos, pero mucho más por un seguro privado.

Para los europeos, es una inmensa vergüenza que la Unión Europea esté obligando a los Estados a liberalizar sectores enteros de su economía y regular una política presupuestaria de reducción de gastos públicos.

En el fondo, el objetivo neoliberal consiste en romper el monopolio estatal y sobrevalorar la estructura económica neoliberal. Imponen así la rentabilidad en los servicios públicos de todo tipo, lo cual provoca la aparición de una calidad diferenciada en dichos servicios, que estará en función de los medios privados de cada usuario. El mercado sustituye al servicio público y el cliente, al usuario. El resultado: sectores enteros de la población son abandonados en las cunetas de su existencia.[4]

---

[1]Producto Interior Bruto.

[2]La capitalización individual consiste en acumular las aportaciones de cada persona a lo largo del tiempo en su cuenta particular para constituir su propio fondo para su jubilación junto a los rendimientos que se vayan generando.

[3]Se ocupa de la correcta distribución de los bienes y las cargas en una sociedad determinada.

[4]Este artículo debe mucho al brillante economista Thomas Porcher.

Pepa Úbeda